

## **Nos toman por idiotas. Eufemismos para el despiste (...en las pensiones)**

No deja de ser patético el esfuerzo de algunos políticos y creadores de opinión en la apropiación grosera del lenguaje para la manipulación. Día sí y otro también, vemos como estos propagandistas, de manera sutil o grosera, utilizan la retórica sofista y ciertos eufemismos que, no solo buscan edulcorar y suavizar la expresión, persiguen, fundamentalmente, encubrir el verdadero objetivo de ciertas actuaciones y sus consecuencias (cuando no engañar directamente).

Tenemos un caso reciente, de los muchos que hay, con la reforma de las pensiones que nos propone el Gobierno y con algunos de los eufemismos y argumentos retóricos utilizados para su venta, tan rimbombantes todos ellos como engañosos. Por ejemplo: El "factor de equidad intergeneracional" (ahora, "factor de sostenibilidad") y el "factor de revalorización anual" (ahora, "índice de revalorización de las pensiones"). Dos fórmulas para la contención del gasto en pensiones, que en su momento propuso el Comité de Expertos nombrado por el Gobierno para la reforma de las pensiones (un Consejo de supuestos 12 'sabios', 8 de los cuales están vinculados a entidades financieras o a la patronal de seguros).

Dos mecanismos cuyo objetivo, dice la Ministra de Empleo y Seguridad Social, son para garantizar la "*sostenibilidad de las pensiones*"; que le permite añadir, con énfasis pasional desmedido: "*las pensiones van a subir siempre, ya nadie volverá a congelarlas*".

La realidad es otra. Lo que se pretende realmente es aplicar un índice de revalorización de pensiones que sustituye al mecanismo que garantizaba su poder adquisitivo. Las pensiones, en los años malos, se subirán como mínimo un 0,25% (no se congelan técnicamente, pero se le parece mucho), y lo que no dice la ministra es que la pérdida de poder adquisitivo no será solo un año, serán bastante más. Solo con las previsiones de inflación de los PGE de 2014, se perdería un 1,25% de poder adquisitivo, que necesitaría 5 años de bonanza para recuperar el mismo (en los últimos 12 años hemos tenido una inflación del 3%)

Igualmente, se pretende aplicar un factor de sostenibilidad cuya fórmula da como resultado bajar la cuantía de las nuevas pensiones solo por la afectación del alargamiento de la esperanza de vida.

Es decir, una vez más, se persigue conseguir el equilibrio financiero recortando derechos y golpeando a los colectivos más vulnerables (los que menor margen de maniobra tienen), los pensionistas. Más recortes, en un contexto ya de recortes del Estado de bienestar, y lejos de las bondades que se proclaman.

En la práctica, no nos engañemos, con la reforma de pensiones se busca seguir debilitando el pilar redistributivo de nuestra política fiscal (menor gasto en educación, sanidad, pensiones, dependientes... para conseguir menos impuestos), por un lado; y también potenciar los seguros privados de pensiones, por otro. No deja de ser un paso más, en la ya conocida estrategia que viene desarrollando la derecha, de 'jibarización' del Estado y transferencia de recursos públicos al sector privado.

Es indignante ver cómo se aplican políticas que anteponen obsesiones ideológicas e intereses económicos particulares al interés general o al bienestar de los colectivos más desfavorecidos.

Se dice, por parte del Gobierno y sus expertos *ad hoc*, que las soluciones propuestas son la respuesta a las dificultades del sistema. Sin embargo, como manifiesta el Catedrático de Economía Aplicada de la Universidad Autónoma de Madrid, Santos Ruesga (miembro de la Comisión de Expertos que votó en contra del informe de estos expertos), *“la reforma debería plantearse con más tranquilidad, observando los efectos sobre la sostenibilidad financiera derivados de la aplicación de la Ley 27/2011”*. Igualmente, afirma el profesor Ruesga, *“la reforma no debe pivotar en el recorte adicional a las pensiones medias sino otras actuaciones que fundamentalmente supusiera aumento de los recursos destinados al pago de las pensiones”*.

No deja de ser curioso que las respuestas se den sin distinguir si los problemas son coyunturales o de medio y largo plazo, algo que no es baladí, y que, igualmente, las soluciones que se dan, en cualquier caso, sean las mismas: rebajar las pensiones (bien por la pérdida de poder adquisitivo, bien reduciendo el importe de la pensión).

Es evidente que hay un problema coyuntural, que tiene que ver con la caída de ingresos en el sistema (por la destrucción de empleo) y un mayor gasto derivado de las pensiones actuales y las nuevas (efecto sustitución). Pero, precisamente, para eso estaba (y está) el Fondo de Reserva de la Seguridad Social (del que se va tirando), y que actualmente tiene casi 60.000 millones de euros. Por activa y por pasiva, se nos dijo que el ahorro de los años de bonanza servirían para garantizar el pago de las pensiones en momento de coyuntura desfavorable. Pues, en esa estamos.

Dice el Gobierno que, con la reforma (no actualizando las pensiones respecto al IPC y aplicando, a partir de 2019, el factor de sostenibilidad), se generará un ahorro de casi 33.000 millones de euros hasta el año 2022 (algo engañoso, pues sería sobre la base de una inflación del 1% durante 8 años, algo nunca conseguido en nuestro país). Es decir, el ahorro podría ser dos o tres veces mayor y la pérdida de los pensionistas también.

Ahora bien, incluso con esos cálculos, se supone que estarían garantizadas las pensiones, dado que, de aquí a 2022, el sistema de pensiones no puede soportar ese sobrecoste de 33.000 millones (ojo, el coste al sistema bancario, que pagaremos todos, es de 38.000 m€). Pues, al mismo tiempo, se nos dice que el sistema llegará a 2016 con un déficit acumulado de 36.500 millones de euros, de seguir en la situación actual.

Pero, para cubrir ese déficit sin coste social, ¿por qué no utilizamos la mitad del Fondo de Reserva, que para eso está? Acaso, ¿no se ve ya la luz del túnel? ¿no estamos saliendo ya de la recesión y se va a empezar a crear empleo?

Según el Gobierno, en los próximos años recuperaremos nuestro nivel empleo; es más, afirman que a partir de 2015 habrá creación neta de empleo y, por tanto, también de ingresos y el sistema no se resentiría.

En un país con seis millones de parados, ¿no deberíamos ser capaces, si remonta la economía, de recuperar en los próximos años los cotizantes que necesita el sistema? Con un millón doscientos mil, se estabilizaría el sistema. Claro, que eso exigirá una política económica distinta a la máquina de destruir empleo de la política actual del Gobierno (con su reforma laboral, en un año 780.000 cotizantes menos). El PP había prometido 3,5 millones de puestos de trabajo en esta legislatura.

Hay una paradoja que no deja de tener su *no sé qué y su qué sé yo*. Con una reforma (de las pensiones) se quiere sustraer a los pensionistas 33.000 millones de euros (que probablemente sería bastante más), y con otra reforma (sector eléctrico) se les regala 27.000 m€ a las empresas eléctricas.

Otra cuestión, diferente, es dar respuesta a los problemas a medio y largo derivados de factores demográficos más intensos de lo esperado y la mayor esperanza de vida. Hace dos años se aprobó otra reforma de las pensiones, Ley 27/2011, fruto de un acuerdo con los interlocutores sociales que, precisamente, para atajar esos problemas, alargó la edad de jubilación y contemplaba el factor de sostenibilidad en 2027 (momento en el que se intensificará el gasto en pensiones por la jubilación de la generación "*baby boom*"). Eso sí, con otros parámetros distintos de lo aconsejado ahora por los expertos del Gobierno.

Con las medidas ya introducidas en la ley 27/2011, en 35 años el gasto en pensiones en España llegaría en torno al 13% del PIB, niveles similares a la media europea actual o países como Alemania, Italia, Francia. Mientras que la recaudación actual del sistema está en torno al 10%. Luego, si dentro de treinta años gastaremos lo mismo que ya están gastando países como Alemania o Francia, no es que seamos unos derrochadores (con una pensión media inferior a 900€). Sin embargo, es cierto que, de no aumentar los ingresos por cotizaciones (más empleo), habría un desequilibrio. Pero, la solución no necesariamente debe venir sólo por la vía del gasto sino del ingreso.

Como se ha hecho otras veces, con la sanidad o con las pensiones mínimas, habrá que explorar otras opciones y también la mayor aportación del Estado. Pues, el problema no es tanto de gasto como de ingresos fiscales.

Pero claro, lo anterior, choca con la estrategia de quienes interesadamente están aprovechando la crisis como coartada para recortar derechos (que se pretende sustituir por la caridad) quebrando la política redistributiva y, en consecuencia, así pagar menos impuestos. Y no es la clase media, cada vez más castigada y deteriorada, los beneficiarios. Son los más ricos, y todos nos entendemos; aquellos que por ideología piden menos impuestos destinados a sostener el Estado de bienestar, y que buscan hacer negocio con las privatizaciones y los fondos de pensiones.

Por eso, detrás de ciertos eufemismos y fórmulas matemáticas de expertos (al servicio de la cosa) lo que se pretende es un cambio de modelo. En el caso de las pensiones, un cambio en el modelo público de la Seguridad Social que recorta pensiones y derechos y libera espacio al lucrativo negocio de las pensiones privadas.

Dice el profesor Ruesga, sobre resultado de la reforma en pensiones que se propone: *“El valor real de la pensión tenderá a disminuir. Particularmente en los años de depresión, sin que se vaya a recuperar la pérdida de valor adquisitivo en la fase de recuperación”*. Y añade: *“Y la tasa de sustitución de la pensión (relación porcentual entre la cuantía de esta y la del salario que se cobraba antes de ser pensionista) disminuirá gradualmente por el efecto conjunto de la aplicación de ambos mecanismos (que se quieren adoptar)”*

En definitiva, eufemismos que, en lugar de suavizar, engañan directamente; dudas de constitucionalidad sobre medidas que no contemplan actualizar las pensiones (y cuya recuperación de poder adquisitivo puede estar por encima de la propia expectativa del pensionista); y solidaridad invertida: salen beneficiados los que más tienen a costa de los más débiles. Así es el nuevo capitalismo que ha perdido el rostro humano.

Otra paradoja. Se recortan gastos en educación, sanidad, dependencia, etc, mientras que se regalan (como a la banca y las eléctricas) millones de euros para potenciar las pensiones privadas. Solo en el ejercicio 2013 están presupuestados 1.112 millones de euros, por reducción de ingresos en el IRPF (más de seis mil millones acumulados desde 2008).

Da qué pensar ¿verdad?